

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 33
O R D I N A R I A
JUEVES 20 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del jueves veinte de marzo de dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro José Ramón Cossío Díaz no asistió a la sesión previo aviso a la Presidencia.

El señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública ordinaria número treinta y dos, celebrada el martes dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Por unanimidad de diez votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves veinte de marzo de dos mil catorce:

I. 377/2013

Contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver, respectivamente, los recursos de queja 25/2013, 29/2013, 40/2013, 42/2013; 46/2013, 52/2013, 68/2013; y 51/2013. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas se propuso: *“PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis. SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo.”* La tesis a que se refiere el segundo punto resolutivo tiene por rubro *“PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE EN EL JUICIO LABORAL DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)”*.

El señor Ministro ponente Franco González Salas realizó la presentación del asunto, recordando que la Segunda Sala, en sesión de ocho de enero del presente año, determinó remitir esta contradicción al Tribunal Pleno, dada su importancia y trascendencia.

Propuso someter a consideración del Tribunal Pleno los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente a la competencia, a la legitimación y a las consideraciones sustentadas por los tribunales colegiados de circuito en las ejecutorias respectivas.

Precisó que, sobre el tema, existe la jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro *“PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.”*

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto contenida en los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente a la competencia, a la legitimación y a las consideraciones sustentadas por los tribunales colegiados de circuito en las ejecutorias respectivas, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de diez votos.

El señor Ministro ponente Franco González Salas expuso las razones del considerando cuarto, relativo a la existencia de la contradicción de criterios denunciada, indicando que propone establecer que existe ésta y fija el punto de contradicción en términos de las ejecutorias contradictorias, consistente en determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido en contra de una resolución que desestima la falta de personalidad de la parte demandada en el juicio laboral, y si se considera o no un

acto de imposible reparación conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto contenida en el considerando cuarto, relativo a la existencia de la contradicción de criterios denunciada, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de diez votos.

El señor Ministro ponente Franco González Salas realizó la presentación del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, señalando concluir que la sola confrontación entre los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, permite advertir que, en cuanto al primero, el legislador adicionó el elemento relativo a lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, precisándolos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, indicando que, desde la iniciativa relativa hasta su aprobación, no sufrió modificación alguna durante el proceso legislativo, no obstante que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General no fue reformado hasta el seis de junio de dos mil once, conservando el señalamiento de procedencia del juicio de amparo contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.

Indicó que, si el precepto constitucional no establece o delimita cómo debe entenderse el concepto de imposible reparación, debe seguir rigiendo la excepción a la regla, prevista en la jurisprudencia citada, consistente en que procede el amparo biinstancial respecto de las resoluciones que, en un juicio laboral, decide sobre una excepción de falta de personalidad.

Finalmente, consideró que la tesis que propone generará debate y que estaría atento al resultado de la votación final.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se manifestó de acuerdo con el proyecto, partiendo de la premisa de que un concepto constitucional, del cual depende la procedencia de un medio de control constitucional, no es de libre configuración legislativa, pues el legislador podría excluir actos propios del escrutinio constitucional, estimando que la jurisprudencia P./J. 4/2001 define dicho concepto constitucional, por lo que no puede ser restringido por el acto de un legislador ordinario.

El señor Ministro Pérez Dayán advirtió que el criterio de este Alto Tribunal ha pasado por distintos temperamentos, considerando en ocasiones que este tipo de actuaciones procesales permiten la procedencia del amparo indirecto porque afectan determinadamente aspectos procesales básicos del enjuiciamiento. Por otro lado, señaló que en la realidad estas determinaciones terminan por ser simples instrumentos que retardan la conclusión de los juicios. En

todo caso, siempre se contempla la importancia de la personalidad en juicio.

En el caso concreto, señaló que el legislador, al regular la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro del juicio, procuró limitarlo contra aquéllos que afectan derechos sustantivos, es decir, no procedimentales, a través del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

Precisó que la jurisprudencia citada partió del contenido del artículo 107 constitucional y del 114 de la Ley de Amparo abrogada, los cuales, si bien trataban de la imposible reparación, no precisaban sus alcances y, por ello, se realizó una interpretación que determinó la procedencia del amparo indirecto contra violaciones sustantivas y procesales, a pesar de que el resultado en muchos de estos casos fuera retardar el procedimiento.

Se pronunció en contra del proyecto porque consideró que el propio legislador delimitó el contenido de una violación sustantiva de derechos contenidos en la Constitución, quien determinó que el juicio de amparo directo sería el que resolvería una cuestión como ésta, con la finalidad de que no se entorpezca el trámite de los juicios.

Refirió que los argumentos del proyecto podrían ser aplicables para otras cuestiones procesales, sin embargo, la tendencia general de la nueva regulación fue la de evitar la multiplicación de juicios durante el procedimiento que, en realidad, dilatan el dictado de un fallo, lo cual se evidencia en

el artículo 170 de la Ley de Amparo (relativo al amparo directo), el cual establece que, cuando dentro del juicio ordinario surjan cuestiones sobre la constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en amparo directo contra la resolución definitiva, estimando que, si el legislador no previó en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo la procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales relevantes, debe atenderse a la distinción que estableció.

Tras analizar la terminología empleada por el Constituyente en el artículo 107 de la Constitución Federal, consideró que la Ley de Amparo, como sistema, pretende evitar la promoción de juicios de amparo indirecto sobre cuestiones enteramente procesales, no violatorias de derechos sustantivos protegidos por la Constitución, estableciendo el juicio de amparo directo para ello, con la finalidad de evitar complicar la tramitación de los juicios ordinarios.

Se inclinó por el criterio que impide la promoción del amparo indirecto tratándose de la excepción de falta de personalidad, tratándose de la resolución que declara infundada una excepción de falta de personalidad, dejándola supeditada a su trascendencia en la sentencia, para que, en su caso, se analice en un amparo directo.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas compartió el proyecto, pues la jurisprudencia P./J. 4/2001 continúa vigente, aun cuando la nueva Ley de Amparo define lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, porque la institución procesal puede acarrear un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que debe ser materia de análisis constitucional inmediato.

Se apartó del proyecto en cuanto considera que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, señala la procedencia del juicio de amparo contra actos de imposible reparación porque, de la interpretación sistemática de dicho artículo constitucional y del 107, fracción V, de la Ley de Amparo obliga, no sólo a tomar en consideración el artículo constitucional, sino a la gama de derechos fundamentales contenidos en el parámetro de regularidad, como podría ser el derecho a un recurso efectivo por lo que, si bien la ley reglamentaria define qué se entiende por actos de imposible reparación, existen derechos fundamentales que exigen una excepción a dicha regla o una ampliación de ese criterio, fortaleciéndose los contenidos del proyecto y la jurisprudencia invocada sin contradecir lo establecido en la Ley de Amparo.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se inclinó en favor del proyecto, de acuerdo al criterio que ha sostenido respecto del tema de actos de ejecución irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo, indicando que sólo la Constitución General es la que debe excluir de control

constitucional de amparo un determinado tipo de actos, estimando que el legislador ordinario de la Ley de Amparo únicamente puede repetir las improcedencias constitucionales o aquellas derivadas de la teleología y técnica del amparo, mas no puede dotar de un contenido distinto a los lineamientos constitucionales.

Por ello, consideró relevante desentrañar el contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, el cual no define los actos de ejecución irreparable y que el criterio de afectación a derechos sustantivos en sentido estricto no es suficiente, pues deben existir violaciones procesales relevantes que den lugar al amparo, recordando que el Tribunal Pleno, en su Octava Época, empezó a excepcionar este criterio rígido y después, en la Novena Época, se realizaron esfuerzos en ese sentido.

Estimó que debe tratarse de derechos sustantivos, pero también violaciones procesales relevantes, precisando que en la Ley de Amparo no se suprimió lo relativo a las violaciones procesales relevantes de manera consciente de su artículo 107, fracción V, pues se mantuvo en el diverso artículo 170, fracción I, por lo que la interpretación armónica del artículo 107 constitucional y estos dos preceptos de la Ley de Amparo, permite entender que cuando se refieren a actos de ejecución irreparable para efectos de procedencia del amparo, se incluyen tanto las violaciones a derechos sustantivos como a las violaciones procesales relevantes, además de que el artículo 107 de la Ley de Amparo no utiliza

las palabras “exclusivamente” ni “únicamente”, sino “entendiéndose por ellos”, lo que deja abierta la interpretación.

Por otro lado, indicó que el análisis aislado del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando refiere que se entenderán como actos en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, arroja que el debido proceso, al ser un derecho humano, difícilmente puede contemplarse como un derecho secundario o adjetivo sino, por el contrario, es quizás el derecho más importante de todos, pues a través de él se protegen los demás derechos humanos, por lo que, en términos del artículo 1º constitucional, ante las violaciones procesales que afecten el debido proceso, debe proceder el amparo indirecto.

El señor Ministro Valls Hernández se mostró de acuerdo con el proyecto porque los alcances de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación no necesariamente deben estar vinculados inmediatamente a derechos sustantivos para definir la procedencia del amparo indirecto, considerando que lo relevante es definir actos en el juicio que, de verificarse, representen una afectación directa a la prosecución y continuidad del procedimiento, como en el caso de la resolución que dirime un incidente de falta de personalidad ya que, de reservarse su análisis al momento

del laudo, implicaría indirectamente una afectación al derecho de justicia pronta y expedita.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se posicionó en contra del proyecto.

Recordó que en la jurisprudencia P./J. 6/1991 de la Octava Época se determinó que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio; entonces, se estableció que la resolución que declara infundado el incidente de falta de personalidad no es de imposible reparación y, al ser una violación procesal, si al final del juicio esa persona recibía una sentencia favorable, al no trascender, ya no tenía interés para reclamar.

Precisó que en la Novena Época, con la jurisprudencia P./J. 4/2001, se replanteó el tema para interrumpir parcialmente la jurisprudencia P./J. 6/1991 y establecer que, de manera excepcional, atendiendo a la gravedad de las violaciones procesales, debe admitirse la procedencia del amparo indirecto, lo que supone una excepción no prevista en la Ley de Amparo para la procedencia del amparo indirecto contra cierto tipo de violaciones procesales, como lo puede ser la falta de personalidad.

Agregó que la Ley de Amparo vigente, al establecer una definición de los actos de imposible reparación a través de su artículo 107, fracción V, no implica que vaya más allá de lo establecido en la Constitución o prevea nuevas causas de improcedencia no previstas por ésta, porque es su ley reglamentaria, siendo que simplemente está desarrollando el concepto que la Constitución contiene, el cual se fue construyendo a partir de las jurisprudencias citadas, estimando que, con este nuevo concepto, éstas quedaron superadas.

Consideró que debe replantearse el análisis de la procedencia del amparo indirecto respecto de las violaciones procesales porque ahora se establece como requisito que exista una afectación material a los derechos sustantivos, lo que no se exigía anteriormente, estimando que, en el caso de lo vinculado con la personalidad, no se reúnen los requisitos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo porque sólo afecta derechos procesales o adjetivos, ya que, de establecerse así, resultaría que cualquier violación procesal afectaría derechos sustantivos y harían procedente el juicio de amparo indirecto, lo cual es contrario a la lógica de la Ley de Amparo en cuanto a la vía para impugnar violaciones procesales.

Recapituló que la jurisprudencia P./J. 4/2001 tampoco contempló que lo atinente a la personalidad fuera un acto de imposible reparación, sino que es una violación procesal que afecta de manera predominante, superior, exorbitante y

extraordinaria, lo que tampoco sucede con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, sin perder de vista el diverso artículo 170, el cual no trata de la procedencia del amparo indirecto, además de que la Constitución contempla únicamente los actos de imposible reparación, sin tocar el tema de las violaciones procesales relevantes.

El señor Ministro Aguilar Morales se adhirió a la argumentación de los señores Ministros Pérez Dayán y Pardo Rebolledo, pues la nueva construcción de la Ley de Amparo contempla que se trate de actos de imposible reparación, sin entrar en cuestiones de afectación de grado predominante, recordando que el Tribunal Pleno, al resolver la modificación de jurisprudencia 13/2011, consideró que los conceptos de afectación en grado predominante o de gran entidad carecen de sustento constitucional, por lo que no podría justificar la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de un procedimiento, sino que debe atenderse la afectación material de un derecho sustantivo de imposible reparación.

Se manifestó en contra del proyecto y recordó que, a principios del Siglo XX, cuando no existían los tribunales colegiados, la carga de trabajo de la Suprema Corte se debía a la infinidad de juicios de amparo promovidos por cada acto procesal que se consideraba inconstitucional, lo que propició la evolución del sistema en la Constitución, en la ley y en la jurisprudencia, para limitarse a la afectación de

derechos sustantivos que no pudieran repararse ni siquiera con una sentencia favorable.

El señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso a las trece horas y reanudó la sesión a las trece horas con veintinueve minutos.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó en contra del proyecto.

Indicó que las violaciones procesales representan un problema de interpretación en el amparo judicial y en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio porque en éstos siempre procederá el amparo indirecto al no tratarse la resolución definitiva de una sentencia jurisdiccional, lo que no ocurre con la decisión que se tome dentro de un amparo judicial.

Reseñó que, respecto de la Ley de Amparo anterior, el artículo 114, fracción II, establecía la procedencia del juicio de amparo indirecto en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se combatieran con la decisión última. En cuanto al amparo judicial, el artículo 114, fracción IV, permitía el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se tratara de violaciones por una ejecución de imposible reparación, y los artículos 158, 159, 160 y 161 regulaban el amparo directo respecto de sentencias que pusieran fin al juicio y de violaciones al procedimiento que fueran de tal manera graves que trascendieran al resultado del fallo.

Señaló que el artículo 172 de la Ley de Amparo vigente establece los supuestos en los que pueden impugnarse violaciones procesales cuando se promueve el amparo directo contra la sentencia definitiva en caso de juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, siempre y cuando aquéllas trasciendan al resultado del fallo.

Precisó que las violaciones procesales graves que ameritan su impugnación inmediata en juicio de amparo indirecto, a que se referían el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior y 107, fracción V, del ordenamiento vigente, son los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, lo cual corresponde con el criterio establecido por la Suprema Corte desde la Octava Época.

Recordó que este Alto Tribunal, en la Séptima Época, sostenía que procedía el amparo indirecto contra violaciones al procedimiento, lo que provocó la promoción de una gran cantidad de amparos en contra de cualquier determinación dictada dentro de juicio, lo que generó que los juicios fueran interminables y, por esa razón, se emitió la jurisprudencia P./J. 6/1991, en la cual se definió que por violación irreparable se entendía la que afectara derechos sustantivos y de tal manera que ni la sentencia pudiera resarcir esa afectación; posteriormente, en la jurisprudencia P./J. 4/2001, se agregó la excepción cuando se trate de una violación que

afecte en grado predominante o superior, lo cual consideró una situación discrecional y subjetiva, que da lugar a inseguridad jurídica.

Señaló que en la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once no se modificó el artículo 107 constitucional, el cual, al contemplar que las controversias referentes al artículo 103 constitucional, con excepción de la materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, delegó al legislador ordinario la determinación de los supuesto de procedencia del juicio de amparo, en la inteligencia de que en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo definió como actos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Agregó que en la exposición de motivos de la Ley de Amparo no se realiza ninguna aclaración al respecto, pero estimó que la lectura natural de los artículos referidos proporciona una definición que procura el principio de concentración.

Por otra parte, precisó que la exposición de motivos de la referida reforma constitucional se establece que, en materia de impartición de justicia, es necesario brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo pues, en ocasiones, puede resultar un medio lento para la obtención de la justicia, por lo que se estimó conveniente adoptar

medidas encaminadas a darle mayor celeridad, a través del análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso a fin de resolverlas conjuntamente y evitar dilaciones innecesarias. A lo anterior se suma la institución de las figuras de amparo adhesivo y revisión adhesiva.

En cuanto a lo expresado en esta sesión, respecto a que el derecho de acceso al debido proceso es una violación a un derecho sustantivo, consideró que se trata de una garantía para hacer efectivos los derechos humanos establecidos en el artículo 1º constitucional, mas no es un derecho sustantivo.

Finalmente, estimó que la última jurisprudencia emitida ha perdido vigencia porque la Ley de Amparo actual establece de manera exclusiva la definición de violación procesal irreparable y, de no considerarse así, entonces habría que declarar inconstitucional el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo.

El señor Ministro Presidente Silva Meza acordó postergar el análisis del asunto para la siguiente sesión y que continúe en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las catorce horas, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria del día lunes veinticuatro de marzo de dos mil catorce, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.